
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO

LA **A**GENDA

Publicación No.6 – Marzo 2020

EMERGENCIA SANITARIA: ENTRE AUTORITARISMO Y ESTADO DE BIENESTAR

Por Anselmo Muñiz

La actual emergencia sanitaria que hoy enfrenta el mundo por la pandemia del coronavirus llega en medio de una crisis global de la democracia. La deriva autoritaria en muchos países de importante peso geopolítico ha dificultado la respuesta al tema sanitario, y además ha hecho sonar las alarmas por la posibilidad de que el virus sea utilizado como excusa para debilitar aún más las abatidas instituciones democráticas.

En la República Dominicana, la situación tiene sus peculiaridades. Primero, se trata de un país con un gran rezago democrático, como se detalla en el Informe sobre calidad democrática en la República Dominicana, publicado en marzo de 2019 por el PNUD. Entre los principales aspectos que este informe reveló sobre el país están la debilidad en la protección de los derechos sociales y económicos (en especial el derecho a la salud, la educación y la seguridad social) y el estancamiento o retroceso de varios indicadores sobre la calidad de las elecciones y sobre los frenos y contrapesos llamados a limitar el ejercicio desmedido del poder del gobierno central.

A lo anterior se suma que desde el 2017, el país ha experimentados momentos de convulsión política, por el hartazgo de amplios segmentos de la ciudadanía con el dominio político de casi dos décadas del actual partido de gobierno, caracterizadas por la consolidación de privilegios para una claqué político empresarial, a costa de la miseria de la mayoría de los habitantes del país. Esta convulsión ha generado la división del PLD y con ello se ha abierto la posibilidad de su salida del gobierno. Las elecciones municipales extraordinarias del 15 de marzo demostraron una voluntad de cambio en el país y la debilidad electoral del gobierno.

Sin embargo, la emergencia sanitaria es una nueva variable que cambia el escenario político, tanto a nivel internacional como a nivel de la República Dominicana. El estado de excepción es una línea de vida para el gobierno. Con el país detenido, el oficialismo ha gestionado la crisis desde la campaña de su candidato a la presidencia Gonzalo Castillo.

Esta es una práctica política de larga data en el país. En el informe *Captura política de la gestión de riesgo de desastres: entre discrecionalidad y asistencialismo*, publicado en diciembre de 2019 por el ISD, se detalla cómo los desastres son aprovechados por el poder político para generar rédito político. En un caso típico de este estilo de política arribista y autoritaria, la campaña de Gonzalo Castillo ha asumido las labores de asistencia social propias del gobierno durante la emergencia sanitaria entregando ayuda sanitaria a discreción. Asimismo, se han visto señales de una clara intención de presentar a las fuerzas policiales y militares como protagonistas del esfuerzo estatal para enfrentar la pandemia.

Los estados de excepción son siempre la excusa perfecta para fortalecer las tendencias autoritarias. Ese es un peligro que se ha debatido a nivel global en este contexto. Pero que es especialmente urgente para Estados como el dominicano, en el que ya existía una clara ausencia de contrapesos políticos.

Con la oposición desmovilizada por las medidas de distanciamiento social, el gobierno del PLD sigue en plena campaña. Más aún, con la posibilidad cada vez más real de que las elecciones presidenciales y legislativas no se puedan celebrar en mayo, esa discusión ha quedado en suspendida, abriendo paso a que la decisión se tome a última hora y a conveniencia del plan de campaña del gobierno.

Contrario a lo que suele pasar en otras latitudes, en la República Dominicana los desastres son beneficiosos para los gobiernos porque les dan la oportunidad de reestablecer redes de deudores a través de la gestión de la miseria (Melgen, Muñiz, Cáceres, 2019). Ese es el precio de un sistema político sin protección social universal para sus ciudadanos. Quien controla el presupuesto nacional puede programar la política con facilidad, porque los ciudadanos están a merced de la discrecionalidad del gobierno ante la ausencia de derechos que les permitan reclamar su participación en el excedente social desde su propia agencia (Melgen, Muñiz, Cáceres, 2019).

A todo esto se suma el evidente impacto negativo que tendrá la pandemia en la economía global y nacional, sobre todo contra los pobres. Con millones de parados en todo el mundo la recesión que se viene seguirá cobrando víctimas mucho tiempo después de que pase la emergencia sanitaria.

En el caso dominicano, los altos niveles de precariedad laboral y empresarial de millones de personas tanto en el sector formal como el informal, implica que de un lado, estos no podrán acogerse a las medidas protectoras para salvaguardar su salud, o que hacerlo implicará un costo económico mayor. Para el resto del año, muchas familias se verán en serios aprietos económicos. Esta vulnerabilidad económica también deja al país en una debilidad política para reclamar una democracia más sólida.

Ante este cuadro, urge la vigilancia y el control ciudadano, en especial a través de los partidos políticos, a las medidas del gobierno. Es precisamente en una crisis cuando mayor vigilancia se requiere para evitar abusos del poder político y la élite empresarial.

Lo usual en contextos de emergencia nacional es que los gobiernos incluyan a la oposición en la toma de decisiones importantes, precisamente porque representan una parte, muchas veces mayoritaria, de la ciudadanía.

Ciertamente, estamos en un momento difícil dado que en la última década y media resulta patente que las instituciones liberales son inadecuadas para el tipo de representación que requieren las sociedades contemporáneas. Pero al mismo tiempo, el desarrollo de nuevas instituciones de representación se tardará muchos años aún, por lo que tenemos que resolver con lo que tenemos.

El examen de la respuesta del gobierno dominicano no puede quedarse en la superficialidad de las medidas paliativas que se tomen, siguiendo las tendencias internacionales, pues la emergencia sanitaria coincide con un sistema de protección con demostrada insuficiencia en situaciones ordinarias. Habría que preguntarse si ¿por qué es necesario utilizar las fuerzas armadas para implementar las medidas de aislamiento? ¿por qué no tiene el Estado la

legitimidad necesaria para generar confianza en la ciudadanía de que las medidas que se toman tienen como objetivo la protección de la salud?

Resulta claro que la precariedad salarial de millones de personas en el país no les permite abastecerse para dos o tres semanas de encierro. Asimismo, el sector de Mipymes que genera 2.7 millones de empleos será golpeado fuertemente. La respuesta del gobierno ha sido prometer entre 5 mil y 8.5 mil pesos por empleado, evidentemente aporte de miseria.

Justamente en esto ha consistido la política social dominicana, en administrar la miseria para seguir manteniendo los privilegios de una élite económica y política cuyas riquezas dependen de los negocios políticos que se hacen con los derechos de las grandes mayorías.

Frente al uso de las fuerzas militares contra los más pobres (por ejemplo, la militarización de San Francisco de Macorís), resalta la pasividad del gobierno con la cúpula económica del país. Los llamados a que todos hagamos nuestra parte para frenar la pandemia resultan vacíos en un país con un sistema fiscal regresivo, que premia la evasión, el fraude y el lavado con leyes de amnistía fiscal.

La salud pública se ha dejado a la caridad cristiana de la cúpula económica, en vez de exigirles que aporten en función de su cuantiosa riqueza. Como se mostró en el mencionado Informe sobre calidad democrática en la República Dominicana: décadas de crecimiento económico en el país no han producido un Estado de bienestar que pueda garantizar un estándar de vida alta para los ciudadanos, precisamente porque esa cúpula económica y política se ha apropiado de casi todas las riquezas generadas.

La pandemia es un recuerdo de que el riesgo no puede gestionarse individualmente, sino que debe gestionarse de manera mancomunada y solidaria.

A todo esto se hace notar la ausencia de una oposición activa que ponga “el dedo sobre la llaga” de la forma desigualitaria como la pandemia y el encierro obligatorio afectan a los habitantes del país.

En el mediano y largo plazo esto debe llevarnos a desechar el sistema mafioso de gobierno y a entender que la creación de capacidades para una ciudadanía resiliente depende de que el Estado priorice el acceso universal a ciertos bienes y servicios sobre los negocios que puedan realizarse en torno a la producción y distribución de esos bienes y servicios. La propia libertad política demanda que la población tenga seguridad en el acceso a bienes primarios que les permita mantener una alta calidad de vida frente a desastres y crisis económicas. De lo contrario, seguiremos teniendo una ciudadanía a merced del que maneje el presupuesto nacional. Garantizar una participación de la ciudadanía en el excedente social a través de derechos sociales y económicos fuertes, es la única forma de tener una democracia sólida que pueda enfrentar las futuras crisis de un mundo globalizado.

Referencias:

Espinal, R., Manzi, M., Muñiz, A., et al. *Informe sobre calidad democrática en la República Dominicana: Universalizando derechos para la ciudadanía formal y sustantiva del siglo 21 en América Latina y el Caribe*, PNUD: Santo Domingo, 2019.

Melgen, L. Muñiz, A., Cáceres, P. *Captura política de la gestión de riesgos de desastres: entre discrecionalidad y asistencialismo*, ISD, Oxfam: Santo Domingo, 2019. En línea: https://dcl1e4274-fbd0-45e2-951f-258e7c263711.filesusr.com/ugd/19a8bc_62aff43b67054217a2acd735d8cb95a5.pdf

SOBRE EL AUTOR:

Anselmo Muñiz es Abogado, con Máster en Derecho y Desarrollo en la Universidad de Manchester, Reino Unido y Máster en Métodos de Investigación Social de la misma universidad. Actualmente es el Director de Investigaciones del Instituto de Investigación Social para el Desarrollo (www.institutoisd.org) Dominicana, donde ha dirigido varias investigaciones relativas al área de ciudadanía y política.

INSTITUTO
DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO

